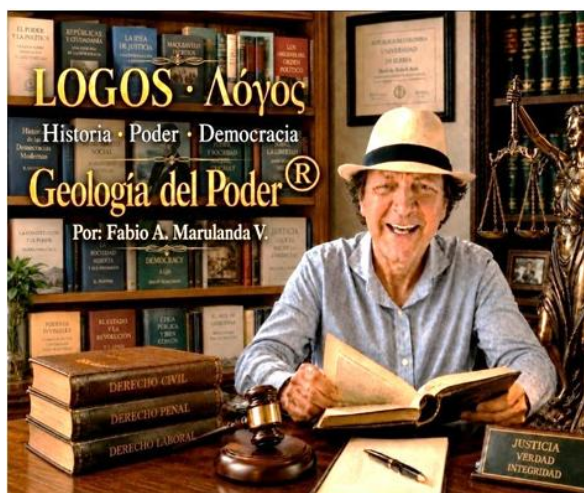




CUANDO EL ADVERSARIO DEJÓ DE SER UN COMPATRIOTA

Por Fabio A. Marulanda V.***

«Toda noticia tiene una historia. Toda historia tiene una Geología del Poder®».

I. LA HERENCIA QUE NUNCA TERMINÓ

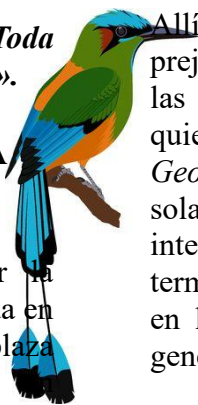
Hay fotografías que parecen resumir la historia de un país. Una iglesia convertida en refugio durante una guerra civil; una plaza vacía después de un magnicidio; campesino que abandona su tierra llevando sobre los hombros lo poco que alcanzó a rescatar; una madre que conserva durante décadas la esperanza de encontrar a un hijo desaparecido. Colombia está llena de esas imágenes. Han cambiado los lugares, las fechas y los protagonistas, pero todas parecen pertenecer a un mismo álbum familiar, como si cada generación hubiera recibido la obligación de agregar una nueva página al inventario nacional del dolor.

Tal vez ésa sea una de las paradojas más desconcertantes de nuestra historia. Ningún colombiano ignora que el país ha vivido demasiadas guerras. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar que el verdadero problema no ha sido únicamente la

repetición de los conflictos, sino la sorprendente facilidad con la que hemos terminado heredando las maneras de odiar que esos conflictos produjeron. Las guerras dejan muertos, desplazados y ruinas materiales; pero también dejan algo mucho más difícil de reconstruir: una forma de mirar al otro. Cuando esa mirada convierte al adversario en un enemigo absoluto, la violencia comienza a sobrevivir incluso después de que los fusiles se silencian.

Quizá por eso la historia de Colombia no pueda explicarse únicamente a través de presidentes, partidos políticos o enfrentamientos armados. Existe un nivel más profundo donde las transformaciones ocurren con una lentitud casi imperceptible. Allí se forman las emociones colectivas, los prejuicios, las memorias y las palabras con las que una sociedad aprende a nombrar a quienes piensan distinto. Ésa es la verdadera *Geología del Poder®*. No la que se ocupa solamente de los gobiernos, sino la que intenta comprender cómo ciertas ideas terminan sedimentándose hasta convertirse en hábitos culturales que sobreviven a las generaciones que las produjeron.

Al revisar las obras de Herbert Braun, James Henderson, Daniel Pécaut, Alfredo Molano, Germán Arciniegas, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Alberto Donadio y muchos otros autores que han dedicado su vida a estudiar la historia colombiana, aparece una intuición que atraviesa sus investigaciones, aunque cada uno la exprese de manera distinta. Los conflictos colombianos nunca fueron simples episodios militares. Constituyeron también largas disputas por la manera de entender la nación, el Estado, la autoridad y la legitimidad del adversario. Cada guerra modificó el mapa político del país, pero también dejó una huella mucho más profunda: enseñó a nuevas generaciones



una determinada forma de comprender el poder.

Ésta es la pregunta que orienta las páginas que siguen. No pretende establecer un tribunal para decidir qué partido político tuvo mayor responsabilidad en nuestras tragedias ni distribuir culpas entre izquierdas y derechas, entre gobiernos civiles o militares, entre vencedores y vencidos. Esa tarea corresponde a los historiadores especializados en cada período. La inquietud de este ensayo es otra, quizá más incómoda y también más urgente:

¿en qué momento los colombianos comenzamos a creer que quien piensa diferente deja de ser un compatriota para convertirse en un enemigo?

Mientras no respondamos esa pregunta, seguiremos interpretando cada crisis como si fuera completamente nueva, cuando tal vez sólo sea la expresión más reciente de una historia que aún no hemos terminado de comprender.

II. CUANDO EL ODIO APRENDE A HEREDARSE

Hay herencias que se transmiten mediante documentos, escrituras o testamentos. Otras viajan de una generación a otra sin necesidad de dejar constancia escrita. Se alojan en las palabras, en los silencios, en los miedos y en las formas de comprender el mundo. La historia de Colombia parece haber conocido ambas. Mientras los archivos conservan la memoria de las constituciones, de las reformas políticas y de los acuerdos de paz, la vida cotidiana ha transmitido otra herencia mucho menos visible: la sospecha permanente frente al otro. No se trata únicamente del recuerdo de antiguas guerras, sino de una manera de interpretar la

diferencia política como si encerrara siempre una amenaza.

Quizá ésta sea una de las consecuencias más profundas de los conflictos prolongados. Las guerras no sólo destruyen ciudades o desplazan comunidades enteras; modifican también la sensibilidad moral de quienes sobreviven a ellas. Poco a poco, la desconfianza comienza a parecer prudencia; el miedo adquiere la apariencia de sentido común y la descalificación del adversario termina siendo aceptada como una forma legítima de participación política. Lo verdaderamente preocupante es que ese aprendizaje no desaparece automáticamente cuando cesan los enfrentamientos armados. Permanece instalado en la memoria colectiva y continúa influyendo sobre generaciones que nunca experimentaron directamente los acontecimientos que le dieron origen.

La historiografía colombiana ha descrito con enorme precisión las causas de nuestras guerras. Menos frecuente ha sido preguntarse por las consecuencias culturales que esas guerras dejaron sobre la sociedad. Herbert Braun mostró cómo el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán alteró profundamente el rumbo político del país. Daniel Pécaut explicó la fragilidad histórica del Estado colombiano y las complejas relaciones entre violencia y legitimidad. Alfredo Molano recorrió durante décadas los territorios donde el conflicto transformó la vida cotidiana de miles de campesinos. Cada uno iluminó un aspecto distinto de nuestra tragedia nacional. Sin embargo, cuando esas obras son leídas conjuntamente, sugieren una conclusión que trasciende sus investigaciones particulares: la violencia terminó educando la manera como los colombianos aprendimos a percibir al contradictor.

Ésa es, probablemente, la herencia más difícil de desmontar. Las leyes pueden modificarse



mediante mayorías parlamentarias; las instituciones pueden reformarse mediante nuevas constituciones; incluso los grupos armados pueden desaparecer. Pero ninguna transformación jurídica resulta suficiente cuando una sociedad continúa interpretando la política como un escenario donde el adversario representa un peligro antes que un interlocutor. Allí comienza la responsabilidad de la cultura, de la educación y de la memoria histórica. Porque la reconciliación no consiste únicamente en firmar acuerdos entre quienes combatieron. Consiste, sobre todo, en enseñar a las generaciones futuras que ninguna diferencia ideológica justifica la pérdida del reconocimiento mutuo como ciudadanos pertenecientes a una misma comunidad política.

III. CUANDO LA POLÍTICA APRENDIÓ A EXCLUIR

Sería un error atribuir la tragedia colombiana a la maldad de determinados dirigentes o a las decisiones de una sola generación. La historia rara vez puede explicarse mediante la voluntad de unos cuantos individuos. Los hombres cambian; las estructuras permanecen. Los presidentes llegan y se marchan, los partidos ascienden y descienden, las constituciones se reforman y las ideologías se transforman. Sin embargo, existen ciertas maneras de comprender el poder que sobreviven a todos esos cambios y terminan convirtiéndose en una especie de tradición silenciosa. Colombia parece haber conocido una de ellas: la tendencia a interpretar la diferencia política como una amenaza antes que como una condición natural de la vida democrática.

La República nació proclamando ideales de libertad, ciudadanía y representación política. Sin embargo, muy pronto comenzó a experimentar una sucesión casi

ininterrumpida de guerras civiles donde el adversario dejó de ser un competidor legítimo para convertirse en alguien cuya derrota debía ser absoluta. Esa lógica atravesó el siglo XIX y no desapareció con el inicio del siglo XX. Simplemente adoptó nuevas formas. El enfrentamiento bipartidista, la violencia posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el surgimiento de las guerrillas, la respuesta contrainsurgente, el paramilitarismo y la expansión del narcotráfico modificaron los actores del conflicto, pero conservaron un elemento común: la dificultad para reconocer legitimidad política en quien ocupaba la orilla opuesta.

Ésa es una continuidad histórica que merece ser examinada con mayor detenimiento. Herbert Braun demuestra que el asesinato de Gaitán no puede entenderse únicamente como la muerte de un líder político; significó una ruptura en la confianza de amplios sectores de la población frente al Estado y frente a la posibilidad de resolver las diferencias mediante la deliberación democrática. Daniel Pécaut, por su parte, ha insistido en que la violencia colombiana no responde exclusivamente a factores económicos o militares, sino también a la debilidad histórica de los mecanismos capaces de integrar políticamente a una sociedad profundamente diversa. Alfredo Molano recorrió durante décadas las regiones donde el abandono estatal y la guerra terminaron confundiendo la autoridad con el miedo. Ninguno de estos autores ofrece una explicación única, pero todos coinciden en señalar que la violencia colombiana no puede comprenderse sin estudiar las relaciones entre poder, exclusión y legitimidad.

La pregunta, entonces, deja de ser exclusivamente histórica y adquiere una dimensión ética. *¿Qué ocurre con una sociedad que durante generaciones aprende*



a sospechar del contradictor antes de escuchar sus razones? Poco a poco, el lenguaje político comienza a transformarse. El debate deja de orientarse hacia la búsqueda de soluciones comunes y se convierte en un escenario donde lo importante ya no es persuadir, sino derrotar; ya no es convencer, sino desacreditar; ya no es construir acuerdos, sino impedir que el otro exista políticamente. En ese momento la democracia comienza a deteriorarse mucho antes de que aparezcan las primeras señales visibles de la crisis institucional.

Éste es, probablemente, uno de los mayores desafíos del presente colombiano. La polarización contemporánea no nació con las redes sociales ni con los gobiernos recientes. Las plataformas digitales han acelerado un fenómeno mucho más antiguo. La descalificación absoluta del adversario ya existía cuando los discursos se pronunciaban desde los balcones de las plazas públicas; hoy simplemente circula con mayor velocidad y alcanza una audiencia infinitamente más amplia. La tecnología ha cambiado los instrumentos; la lógica permanece sorprendentemente parecida.

Por esa razón, reducir el análisis de la historia colombiana a una confrontación entre izquierdas y derechas constituye una simplificación que empobrece la comprensión del problema. En distintos momentos de nuestra trayectoria republicana, unos y otros han ocupado el gobierno; unos y otros han denunciado persecuciones; unos y otros han reivindicado la democracia mientras acusaban al adversario de representar un peligro para la nación. La historia obliga a reconocer esa complejidad. Ningún sector político posee el monopolio del sufrimiento ni de la responsabilidad histórica. Todos, en mayor o menor medida, han participado de una cultura donde la exclusión terminó ocupando el lugar que

debería corresponder al reconocimiento del otro como ciudadano.

Y quizá sea precisamente allí donde comienza la posibilidad de una transformación. Porque las culturas políticas no son un destino inevitable. Son construcciones históricas. Y todo aquello que ha sido construido por la historia puede ser modificado por la historia. La reconciliación no consiste en olvidar el pasado ni en renunciar a las convicciones. Consiste en aceptar que ninguna idea política merece el precio de destruir la comunidad nacional que pretende gobernar. Cuando una democracia pierde esa convicción, deja de discutir proyectos de país y comienza, lentamente, a discutir quién merece seguir perteneciendo al país.

IV. CUANDO EL PODER NECESITA ENEMIGOS

Toda comunidad política necesita diferencias. Sin ellas no existirían el debate, la deliberación ni la posibilidad misma de construir una democracia. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre el adversario y el enemigo. El adversario discute nuestras ideas; el enemigo cuestiona nuestra existencia. Mientras el primero hace posible la política, el segundo la destruye. La historia de Colombia parece haber oscilado demasiadas veces entre esas dos categorías, hasta el punto de convertir una diferencia propia de toda democracia en una confrontación donde el otro dejó de ser visto como un ciudadano para convertirse en una amenaza que debía ser neutralizada.

No ocurrió de un día para otro. Ninguna sociedad despierta una mañana convencida de que la eliminación del contradictor constituye una forma legítima de hacer política. Ese proceso suele construirse lentamente mediante el lenguaje, la



propaganda, los discursos partidistas y la repetición constante de una misma idea: que el adversario representa un peligro tan grande que cualquier medida adoptada contra él termina pareciendo justificable. Cuando esa lógica se instala en la cultura política, la frontera entre la controversia democrática y la deshumanización comienza a desdibujarse. La historia universal ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno, pero Colombia posee una dolorosa experiencia propia que obliga a examinarlo con especial cuidado.

Las guerras civiles del siglo XIX dejaron un legado que fue mucho más allá de sus consecuencias militares. Introdujeron una manera de concebir el poder donde la derrota del contrario no siempre significaba únicamente perder una elección o abandonar temporalmente el gobierno. Con demasiada frecuencia implicaba la exclusión completa de quien representaba el proyecto político opuesto. Esa forma de entender la competencia política sobrevivió al bipartidismo clásico y terminó reapareciendo bajo nuevas expresiones durante el siglo XX. Cambiaron las ideologías, aparecieron nuevos actores armados y se transformaron las condiciones económicas; sin embargo, la dificultad para reconocer legitimidad en el adversario continuó reapareciendo con sorprendente persistencia.

En ese sentido, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán representa mucho más que un episodio trágico de nuestra historia. Constituye un símbolo del momento en que una parte considerable de la sociedad perdió la confianza en la capacidad de las instituciones para canalizar pacíficamente las diferencias políticas. Herbert Braun demuestra con notable claridad que aquel acontecimiento alteró profundamente la relación entre ciudadanía, Estado y violencia. Lo que vino después no fue únicamente una reacción espontánea al magnicidio. Fue la

aceleración de tensiones que llevaban décadas acumulándose y que encontraron en ese momento un punto de ruptura. La historia rara vez obedece a una sola causa; suele ser el resultado de múltiples procesos que convergen hasta hacer inevitable la crisis.

Sería injusto afirmar que únicamente los partidos tradicionales alimentaron esa lógica de exclusión. Las décadas posteriores demostrarían que distintos sectores ideológicos, desde posiciones completamente opuestas, terminaron reproduciendo mecanismos semejantes. La violencia revolucionaria, la violencia contrainsurgente, el paramilitarismo, el terrorismo asociado al narcotráfico e incluso determinados discursos provenientes del propio Estado compartieron, en diferentes momentos, una misma convicción: que la supervivencia del proyecto político propio justificaba la negación moral del adversario. Allí radica una de las continuidades más inquietantes de nuestra historia. No en la identidad de quienes ejercieron la violencia, sino en la sorprendente facilidad con la que sucesivas generaciones aceptaron que la política podía organizarse alrededor de la eliminación del otro.

Quizá por ello resulte insuficiente interpretar la historia colombiana como una simple alternancia entre gobiernos de izquierda y de derecha, entre períodos democráticos y autoritarios o entre paz y guerra. Esas categorías describen acontecimientos importantes, pero no alcanzan a explicar el fenómeno más profundo: la persistencia de una cultura política donde el poder ha tendido, una y otra vez, a construir enemigos antes que interlocutores. Mientras esa lógica permanezca intacta, cada nuevo conflicto encontrará un terreno fértil sobre el cual reproducirse, independientemente del nombre que adopte o de las banderas bajo las cuales se presente.



La verdadera fortaleza de una democracia no consiste en eliminar las diferencias. Consiste en impedir que esas diferencias destruyan la comunidad política que las hace posibles. Allí reside una de las lecciones más difíciles que ofrece la historia colombiana. Durante demasiado tiempo confundimos la victoria con la aniquilación del contrario y el ejercicio del poder con el derecho a imponer una única visión de la nación. Tal vez haya llegado el momento de comprender que ninguna República puede consolidarse mientras una parte de sus ciudadanos considere que la otra representa un enemigo al que debe derrotar definitivamente. Las democracias no sobreviven porque desaparezcan los desacuerdos; sobreviven porque aprenden a impedir que esos desacuerdos se conviertan en guerras.

V. LA MEMORIA NO BASTA; TAMBIÉN ES NECESARIO APRENDER

Existe una tendencia frecuente en las sociedades que han padecido largos períodos de violencia: creer que recordar es suficiente para impedir que los hechos vuelvan a repetirse. Colombia ha realizado un esfuerzo considerable por reconstruir su memoria histórica. Comisiones de la verdad, informes académicos, archivos documentales, museos, testimonios de víctimas y una extensa producción historiográfica han contribuido a preservar el recuerdo de acontecimientos que jamás deberían caer en el olvido. Ese esfuerzo constituye un patrimonio moral de la Nación y una condición indispensable para cualquier proyecto de reconciliación. Sin embargo, la memoria, por sí sola, no garantiza el aprendizaje.

La historia demuestra que los pueblos pueden recordar durante siglos una tragedia sin modificar las conductas que la hicieron posible. Recordar no siempre significa

comprender. En ocasiones, la memoria termina convirtiéndose en un instrumento para reafirmar antiguas identidades enfrentadas. Cada grupo conserva el recuerdo de sus propios muertos, de sus propias injusticias y de sus propias heridas, mientras las experiencias del otro permanecen invisibles o son consideradas menos legítimas. De esa manera, el pasado deja de ser un espacio para la comprensión compartida y se transforma en un argumento permanente para justificar nuevas formas de confrontación.

Quizá por esa razón Paul Ricoeur insistía en que toda política de la memoria debía estar acompañada por una ética del reconocimiento. Recordar no significa permanecer prisioneros del pasado, sino comprenderlo con la suficiente profundidad para impedir que continúe gobernando el presente. Algo semejante ocurre con la historia. Su función no consiste únicamente en reconstruir los acontecimientos tal como ocurrieron, sino en ayudar a las sociedades a reconocer las decisiones, los prejuicios y las estructuras que hicieron posibles esos acontecimientos. Una memoria que sólo alimenta el resentimiento termina prolongando el conflicto bajo nuevas formas; una memoria que invita a la comprensión abre la posibilidad de una ciudadanía más consciente de su propia responsabilidad histórica.

Éste constituye uno de los desafíos más complejos para Colombia. Durante décadas hemos acumulado investigaciones rigurosas sobre la violencia, hemos documentado miles de testimonios y hemos reconstruido con admirable precisión numerosos episodios de nuestra historia reciente. Sin embargo, todavía parece insuficiente el esfuerzo por traducir ese conocimiento en una verdadera pedagogía democrática. Con demasiada frecuencia, la historia continúa siendo



utilizada como un arsenal de argumentos para derrotar al adversario, cuando debería convertirse en una escuela para comprender la fragilidad de nuestras instituciones y el enorme costo humano que implica destruirlas.

En este punto, la educación adquiere un papel decisivo. No basta con enseñar fechas, presidentes, batallas o reformas constitucionales. Una democracia necesita formar ciudadanos capaces de distinguir entre el desacuerdo y el odio, entre la crítica y la deshumanización, entre la firmeza de las convicciones y la negación de la dignidad del otro. La historia pierde buena parte de su sentido cuando deja de interpelar la conducta de quienes la estudian. De poco sirve conocer los errores de generaciones anteriores si continuamos reproduciendo, con un lenguaje diferente, las mismas formas de exclusión que condujeron al país hacia tantos episodios de violencia.

Las nuevas tecnologías han introducido un desafío adicional. Nunca antes había sido tan fácil acceder a la información ni tan difícil construir una conversación pública serena. Las redes sociales han ampliado extraordinariamente la libertad de expresión, pero también han favorecido dinámicas donde la velocidad suele imponerse sobre la reflexión y la indignación obtiene mayor visibilidad que el argumento. No puede atribuirse a ellas el origen de la polarización colombiana; esa herencia es mucho más antigua. Pero sí han contribuido a intensificar una cultura política donde la descalificación inmediata desplaza con demasiada facilidad el diálogo razonado. La tecnología, por sí sola, no crea las fracturas de una sociedad; simplemente amplifica aquellas que ya existían.

Por ello, la pregunta que hoy enfrenta Colombia no es únicamente cómo recordar su

pasado, sino cómo educar una generación que no necesite repetirlo para comprenderlo. Ésa es la verdadera responsabilidad de la historia. No ofrecer respuestas cómodas ni alimentar nuevas trincheras ideológicas, sino formar ciudadanos capaces de reconocer que ninguna victoria política puede justificar la pérdida de aquello que constituye el fundamento mismo de una República: el reconocimiento recíproco entre personas que, aun defendiendo proyectos distintos de país, continúan compartiendo un destino común.

VI. LA REPÚBLICA COMO APRENDIZAJE MORAL

Existe una profunda diferencia entre fundar una República y aprender a vivir republicamente. La primera tarea puede realizarse mediante una constitución, unas elecciones o la creación de nuevas instituciones. La segunda exige algo mucho más difícil: la formación de una cultura política donde el ciudadano comprenda que el Estado no pertenece al gobierno de turno, ni a un partido político, ni a una ideología, sino al conjunto de la Nación. La historia demuestra que las leyes pueden promulgarse en cuestión de meses; las virtudes republicanas, en cambio, requieren generaciones enteras para consolidarse.

Quizá allí resida una de las paradojas más persistentes de la historia colombiana. Desde la Independencia hemos producido constituciones admirables, juristas de enorme prestigio y una rica tradición de pensamiento político. Sin embargo, paralelamente hemos conservado una notable dificultad para aceptar que la alternancia en el poder constituye una condición normal de la democracia y no una amenaza contra la existencia misma de la República. Con demasiada frecuencia, los triunfos electorales han sido interpretados como autorizaciones para gobernar únicamente en nombre de



quienes obtuvieron la victoria, mientras las derrotas han alimentado la sospecha permanente sobre la legitimidad del vencedor. Ninguna democracia puede alcanzar estabilidad duradera cuando cada elección es vivida como una batalla definitiva entre vencedores absolutos y derrotados irreparables.

La experiencia colombiana invita a una reflexión que trasciende nuestras fronteras. Las democracias no se deterioran únicamente cuando se quebrantan las normas constitucionales. También comienzan a debilitarse cuando el lenguaje público pierde la capacidad de reconocer la legitimidad del adversario. El deterioro institucional suele ser precedido por un deterioro del discurso político. Primero desaparecen la prudencia, el respeto y la disposición al diálogo; después llegan la descalificación permanente, la sospecha sistemática y la idea de que sólo una parte de la sociedad representa auténticamente a la Nación. En ese momento la política deja de ser el espacio donde conviven proyectos distintos de país y comienza a convertirse en un escenario donde cada sector intenta apropiarse del significado mismo de Colombia.



Hannah Arendt observó que la política sólo conserva su sentido cuando los seres humanos reconocen la pluralidad como una condición esencial de la existencia colectiva. No vivimos a pesar de nuestras diferencias; vivimos precisamente porque ellas hacen posible la conversación pública, el intercambio de argumentos y la construcción de acuerdos. Allí donde desaparece ese reconocimiento, la política degenera en una lucha permanente por la eliminación simbólica —y, en los peores momentos de la historia, también física— de quien piensa distinto. Colombia ha conocido demasiado bien ese riesgo. Por ello, la defensa de la República no puede reducirse a la protección

de sus instituciones. Debe comenzar por la defensa de una cultura donde el pluralismo deje de ser percibido como una amenaza y vuelva a entenderse como una riqueza democrática.

Las controversias políticas que hoy dividen al país, independientemente del gobierno de turno o de la orientación ideológica de quienes participan en ellas, deberían conducirnos a una reflexión más serena. Ningún presidente recibe de las urnas la propiedad de la Nación. Ninguna oposición pierde, por el simple hecho de una derrota electoral, su condición de representante legítima de millones de ciudadanos. En una democracia constitucional, la mayoría tiene el derecho y el deber de gobernar; la minoría conserva el derecho y el deber de ejercer control, formular críticas y preparar una alternativa para el futuro. Esa tensión no constituye una debilidad del sistema republicano; constituye, precisamente, su mayor fortaleza.

Por ello, el desafío que enfrenta Colombia no consiste únicamente en disminuir los índices de violencia o fortalecer las capacidades del Estado. Esas tareas son indispensables, pero resultan insuficientes si no van acompañadas de una transformación más profunda. El verdadero reto consiste en reconstruir una cultura política donde el desacuerdo vuelva a ser considerado un ejercicio legítimo de ciudadanía y no una evidencia de traición. Ninguna sociedad puede aspirar a la reconciliación mientras continúe educando a sus nuevas generaciones en la idea de que el triunfo del adversario representa necesariamente una catástrofe nacional. La democracia exige aceptar algo mucho más exigente: que el poder es siempre transitorio, mientras la República pertenece por igual a quienes gobiernan y a quienes ejercen la oposición.

En ese sentido, la historia colombiana ofrece una enseñanza que conviene preservar con humildad. Después de tantas guerras, de tantas víctimas y de tantos intentos de reconstrucción institucional, quizá la mayor responsabilidad de nuestra generación no sea escribir un nuevo capítulo del conflicto, sino interrumpir la larga tradición que convirtió la diferencia política en un motivo de exclusión. Las Repúblicas no se consolidan únicamente cuando aprenden a elegir gobernantes; alcanzan su verdadera madurez cuando aprenden a respetar, con igual convicción, tanto a quienes triunfan en las urnas como a quienes, desde la oposición, continúan representando una parte legítima de la voluntad nacional.

VII. ROMPER EL CÍRCULO

Toda nación conserva una memoria que explica buena parte de lo que es. Algunas recuerdan sus grandes descubrimientos científicos; otras, las revoluciones que ampliaron las libertades de sus ciudadanos; otras, los acontecimientos que marcaron el nacimiento de sus instituciones. Colombia, en cambio, ha debido construir buena parte de su identidad alrededor del recuerdo de sus conflictos. La violencia ha ocupado un lugar tan persistente en nuestra narrativa nacional que, en ocasiones, parece confundirse con nuestro propio destino histórico. Sin embargo, ninguna sociedad está condenada a repetir indefinidamente aquello que heredó de sus antepasados. La historia condiciona, pero no determina. Ésa constituye, quizá, la lección más importante que ofrece el estudio del pasado.

Después de recorrer dos siglos de enfrentamientos políticos, guerras civiles, exclusiones, guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico y procesos de paz, resulta inevitable reconocer que Colombia ha demostrado una extraordinaria capacidad

para reconstruir sus instituciones. Ha reformado constituciones, ha celebrado elecciones, ha firmado acuerdos y ha creado mecanismos jurídicos para enfrentar las crisis más profundas de su vida republicana. Sin embargo, todavía permanece abierta una tarea mucho más compleja y mucho menos visible: reconstruir la confianza entre los propios colombianos. Ninguna reforma institucional será plenamente eficaz mientras continúe predominando una cultura donde el triunfo del adversario sea percibido como una amenaza para la existencia de la Nación y no como una expresión legítima de la voluntad democrática.

Éste constituye el verdadero desafío del presente. No basta con reclamar tolerancia cuando se está en la oposición y olvidarla cuando se llega al gobierno. Tampoco resulta suficiente invocar la defensa de la democracia únicamente cuando los resultados electorales favorecen nuestras propias convicciones. La fortaleza de una cultura republicana comienza precisamente allí donde aceptamos que la legitimidad del sistema depende de reconocer idéntica dignidad política a quienes piensan de manera diferente. Una democracia deja de ser una simple competencia por el poder cuando todos sus actores comprenden que existe un patrimonio superior a cualquier victoria electoral: la permanencia de la comunidad política que hace posible esa competencia.

Las recientes controversias de la vida pública colombiana deberían invitarnos a una reflexión serena y no a una nueva escalada de descalificaciones. Las campañas electorales, por su propia naturaleza, exaltan las diferencias y buscan persuadir al electorado. Pero una vez concluye el escrutinio comienza otra responsabilidad, mucho más exigente que la de conquistar votos: gobernar una República integrada también por quienes no compartieron el proyecto vencedor. Ésa ha



sido siempre la prueba más difícil de las democracias. Las mayorías otorgan el mandato para gobernar; nunca confieren el derecho a desconocer la legitimidad, la dignidad o los derechos políticos de las minorías. Del mismo modo, las minorías fortalecen la República cuando ejercen una oposición firme, crítica y responsable dentro del marco constitucional. La democracia necesita gobiernos; pero necesita, con igual urgencia, oposiciones legítimas y respetadas.

Tal vez el error más persistente de nuestra historia haya consistido en imaginar que la reconciliación depende exclusivamente de los acuerdos firmados entre dirigentes políticos. Los acuerdos son indispensables, pero ninguna firma puede sustituir la transformación cultural que debe producirse en el interior de la sociedad. La reconciliación comienza cuando el ciudadano comprende que la derrota electoral del adversario no equivale a su desaparición como compatriota y que el ejercicio del poder no consiste en administrar una victoria, sino en cuidar una comunidad donde todos continúan perteneciendo a la misma Nación. Ésa es la diferencia entre la lógica de la guerra y la lógica de la República.



La historiografía colombiana ha documentado con admirable rigor nuestras guerras, nuestras fracturas y nuestras tragedias. Quizá haya llegado el momento de escribir, con el mismo rigor, la historia de nuestros esfuerzos por reconciliarnos. Porque las naciones no sólo se construyen a partir de sus victorias o de sus derrotas; también se edifican sobre la capacidad de aprender de sus propios errores. La memoria adquiere entonces un nuevo significado. Deja de ser un archivo de agravios para convertirse en una escuela de prudencia. Recordar ya no significa conservar vivo el resentimiento, sino impedir que la indiferencia permita

repetir aquello que tantas veces nos condujo al sufrimiento.

La verdadera grandeza de Colombia no consistirá en demostrar que una ideología derrotó definitivamente a otra. Consistirá en alcanzar la madurez suficiente para comprender que ninguna doctrina política puede reclamar para sí el monopolio de la Nación. La República pertenece por igual a quienes gobiernan y a quienes discrepan; a quienes obtuvieron la mayoría y a quienes representan a las minorías; a quienes celebran una victoria y a quienes aceptan con dignidad una derrota. Sólo cuando esa convicción se convierta en una costumbre compartida podremos afirmar que hemos comenzado, finalmente, a romper el círculo histórico que durante demasiado tiempo confundió la política con la enemistad.

Al concluir estas páginas no pretendo ofrecer respuestas definitivas. La historia desconfía de las certezas absolutas porque sabe que toda sociedad permanece inacabada. Aspiro, más modestamente, a dejar una pregunta abierta para quienes continúan creyendo en el porvenir de Colombia: *¿seremos la generación que transmita a sus hijos una nueva herencia de sospechas y resentimientos, o tendremos el coraje moral de legarles una cultura política donde el desacuerdo deje de ser una amenaza para convertirse, por fin, en la expresión más alta de una democracia madura?* En la respuesta que demos a esa pregunta no sólo se encuentra el futuro de nuestras instituciones. Se encuentra, sobre todo, la posibilidad de reconciliarnos con nosotros mismos.

VIII. LA LEGITIMIDAD TAMBIÉN EXIGE VERDAD

Las democracias no se fortalecen ocultando las controversias que surgen alrededor de una elección; se fortalecen cuando poseen

instituciones suficientemente independientes para investigarlas con rigor, transparencia y absoluto respeto por el debido proceso. Precisamente porque las elecciones presidenciales de 2026 produjeron un resultado extraordinariamente estrecho, las denuncias formuladas por distintos sectores políticos acerca de posibles irregularidades, del eventual uso de mecanismos de presión sobre el electorado, de estrategias masivas de desinformación o de prácticas capaces de afectar la libertad del sufragio no pueden ser despachadas mediante la simple descalificación política ni convertidas, anticipadamente, en verdades incuestionables. En un Estado constitucional de derecho, ni las acusaciones sustituyen la prueba, ni las mayorías electorales sustituyen la justicia.

Por esa razón, cualquier cuestionamiento serio que recaiga sobre la integridad del proceso electoral debe ser examinado por las autoridades competentes con absoluta independencia, sin presiones partidistas y con las máximas garantías para todas las partes. La legitimidad democrática no se agota en el acto de depositar un voto ni en la proclamación oficial de un resultado. También depende de la confianza ciudadana en que la voluntad popular fue expresada libremente y respetada íntegramente. Cuando esa confianza resulta gravemente afectada, la obligación de las instituciones no consiste en proteger a un gobierno ni en favorecer a una oposición, sino en proteger la credibilidad misma de la República.

La historia demuestra que las democracias más sólidas no son aquellas donde nunca existen controversias electorales, sino aquellas que poseen la fortaleza institucional para investigarlas hasta sus últimas consecuencias. Si, después de una investigación exhaustiva, imparcial y plenamente respetuosa de las garantías procesales, las autoridades concluyen que las denuncias carecen de fundamento, ese pronunciamiento contribuirá a fortalecer la legitimidad del gobierno surgido de las urnas.

Pero si, por el contrario, llegan a establecerse irregularidades de tal gravedad que hubieran comprometido la libertad del sufragio o alterado sustancialmente la expresión auténtica de la voluntad popular, el propio Estado de Derecho dispone de mecanismos constitucionales para restaurar la legalidad, incluso cuando ello implique adoptar decisiones extraordinarias respecto de la elección. No hacerlo significaría transmitir a la sociedad el mensaje de que la estabilidad política vale más que la verdad, cuando una República sólo puede aspirar a perdurar si la verdad jurídica y la legitimidad democrática caminan juntas.

Al fin y al cabo, la grandeza de una democracia no consiste únicamente en aceptar el veredicto de las urnas; consiste también en aceptar, con igual serenidad, el veredicto de la justicia cuando ésta actúa con independencia. Porque ningún gobernante fortalece su autoridad negándose a que se esclarezcan las dudas que pesan sobre su elección. Por el contrario, quien ha recibido legítimamente el mandato de gobernar debería ser el primer interesado en que toda controversia sea resuelta con absoluta transparencia, pues la confianza de la Nación constituye un patrimonio político mucho más valioso que cualquier victoria electoral.

Para seguir pensando

«Las guerras destruyen ciudades; el odio destruye la República».

«Ninguna nación comienza a reconciliarse cuando termina una guerra; comienza cuando el adversario vuelve a ser reconocido como un compatriota».

- ***** Fabio A. Marulanda V.**
- ☆ Historiador. Universidad Nacional de Colombia-UNAL.
- ☆ Abogado. Universidad Autónoma Latinoamericana-UNAULA.
- ☆ Traductor. Universidad de Antioquia-UDEA.
- ☆ Maestrando. Derecho Penal Internacional y Transnacional. Universidad de La Rioja-UNIR, España.

